

EDITORIAL

Violencia en aulas

El próximo miércoles 5 de marzo, miles de estudiantes en Chile retornarán a las aulas, dando inicio de un nuevo año escolar. Sin embargo, este regreso no solo debe verse desde lo académico, sino que desde la preocupante escalada de violencia en los establecimientos educativos, fenómeno intensificado tras la pandemia de covid-19.

La convivencia escolar en Chile ha experimentado un deterioro notable en los últimos años. Según datos de la Superintendencia de Educación, hasta septiembre de 2024 se registraron 8.864 denuncias relacionadas con convivencia escolar, que representa un aumento del 1,3% respecto al año anterior y constituye el máximo histórico desde que se tiene registro. Este incremento no es uniforme en todo el país; regiones como Tarapacá reportaron un alza del 45,3% en las denuncias, mientras que en Biobío y Aysén los aumentos fueron del 18,5% y 16,8%, respectivamente.

La pandemia no solo interrumpió la educación presencial, sino que también exacerbó problemas preexistentes y generó nuevos desafíos en la convivencia escolar. El aislamiento prolongado, la falta de interacción social y el estrés asociado a la crisis sanitaria han contribuido a un aumento en los casos de violencia entre estudiantes. En 2023, las denuncias por maltrato físico y psicológico entre alumnos aumentaron más del 80% en comparación con los años previos a la pandemia. Este dato refleja cómo el confinamiento y la falta de socialización afectaron negativamente las habilidades de convivencia y resolución pacífica de conflictos en la comunidad estudiantil.

Frente a este panorama, es crucial que las autoridades educativas, las comunidades escolares y la sociedad en general tomen conciencia y actúen de manera decidida.

La implementación de programas como “A Convivir se Aprende”, que en 2023 se extendió a más de 1.141 colegios, es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, la efectividad de estas iniciativas depende de su correcta ejecución y del compromiso de todos los actores involucrados.

Además, es fundamental que se asignen recursos adecuados y se focalicen en las zonas y establecimientos más afectados. La fundación Acción Educar ha instado a revisar las políticas implementadas hasta la fecha, advirtiendo la ausencia de mecanismos de monitoreo que confirmen su efectividad. Sin una evaluación rigurosa y ajustes pertinentes, los esfuerzos pueden resultar insuficientes para contrarrestar la creciente ola de violencia.

La prevención debe ser el pilar central en la estrategia contra la violencia escolar. Esto implica no solo la implementación de programas educativos, sino también la promoción de un entorno escolar seguro y acogedor, donde se fomenten valores como el respeto, la empatía y la resolución pacífica de conflictos. La formación continua de docentes en manejo de situaciones conflictivas y la participación activa de las familias son componentes esenciales en este esfuerzo conjunto.

El inicio de este nuevo año escolar representa una oportunidad para renovar el compromiso con la construcción de comunidades educativas más seguras y armoniosas. No podemos permitir que la violencia se normalice en nuestros colegios. Es responsabilidad de todos, desde las autoridades hasta cada miembro de la comunidad educativa, trabajar en conjunto para erradicar este flagelo y garantizar que las escuelas sean espacios de aprendizaje, respeto y sana convivencia.